



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA  
LABORAL

Medellín, Noviembre 24 de 2022

Radicado: 05001 31 05-022-2019-00067-01  
Demandante: CARLOS ALBERTO MONTOYA SIERRA  
Demandado: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES  
NACIONALES DE COLOMBIA  
Asunto: APELACIÓN  
Tema: PENSIÓN RESTRINGIDA.

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

**ANTECEDENTES**

La accionante solicitó sea condenada FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA al reconocimiento y pago de la pensión sanción a partir del 10 de enero de 2018, fecha para la cual cumplió 60 años, indexación.

Para respaldar sus pretensiones, manifestó que laboró para el servicio de FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA – DIVISIÓN ANTIOQUIA – durante

11 años, 5 meses y 21 días, en el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 1980 y el 29 de diciembre de 1991; que fue desvinculado del cargo por supresión del cargo. Que solicitó el reconocimiento y pago de prestación sanción ante la entidad demandada quien resolvió de forma negativa a través de resolución 1254 del 12 de julio de 2018.

Dijo que sufrió un accidente laboral en el año 2000 con una pérdida de capacidad laboral de 6%, razón por la cual el ISS le reconoció indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez por valor de \$1.087.285.

El A quo, tras encontrar demostrada la relación laboral con la demandada por más de 10 años y menos de 15, así como que la terminación del contrato obedeció una causa legal pero no justa, encontró satisfechos los requisitos para el reconocimiento de la prestación que solicita de conformidad con el artículo 31 de la ley 50 de 1990, reconoció la prestación desde el 10 de enero de 2018, en cuantía del salario mínimo y con 14 mesadas anuales, dada la fecha de causación de la prestación.

Decisión que no fue objeto de recurso y que se conoce en esta instancia en el grado jurisdiccional de consulta en favor FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.

## ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, el apoderado del FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA presentó alegatos ratificándose en los argumentos de defensa expuestos desde la contestación de la demanda y haciendo especial énfasis en que las pretensiones del demandante no deben prosperar comoquiera que solicita el demandante se le aplique perdió vigencia con el AL 01 de 2005. Solicitando se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se absuelva de todas y cada una de las pretensiones.

## CONSIDERACIONES

Sea lo primero indicar con las pruebas obrantes, dentro del proceso se encuentra probado que: 1) que el ISS reconoció a través de resolución No. 00828 de 2000

reconoció indemnización por incapacidad permanente parcial asegurado Carlos A Montoya Sierra en cuantía de \$1.087.285. 2) que el demandante laboró al servicio de FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA desde el 18 de febrero de 1980 al 29 de diciembre de 1991, tal y como consta en resolución No. 0593 del 17 de abril de 2018 a través de la cual también se le negó la prestación que solicita. (pág.4 a 8). 3) que de conformidad con la cédula obrante en la página 18 el demandante nació el 10 de enero de 1958. En ese orden de ideas, en esta instancia se discute si al demandante acredita los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión sanción que fue otorgada por el A quo.

Como se indicó en la relación de pruebas, no se discute que el demandante laboró como mecánico II, por más de 10 años sin interrupciones.

Aclarado lo anterior se tiene que la normatividad aplicable para el presente caso es la contenida en el artículo 37 de la ley 50 de 1990, establece en lo pertinente:

En aquellos casos en los cuales el trabajador no esté afiliado al Instituto de Seguros Sociales, ya sea porque dicha entidad no haya asumido el riesgo de vejez, o por omisión del empleador, el trabajador que sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.

Respecto de la aplicación de la prestación que se estudia y puntualmente de la vigencia de la ley 171 de 1961, la H. Corte Suprema de Justicia ha indicado en sentencia SL 2652 de 2019:

“(…) De tiempo atrás, la jurisprudencia de esta Corporación ha enseñado, que tanto en el sector privado como en el oficial, se han denominado de manera genérica pensiones restringidas de jubilación, aquellas que se causan con un tiempo de

servicios inferior al requerido para la denominada pensión plena de jubilación que se consolida con la edad y tiempo de servicios, de manera que el monto de aquellas es proporcionalmente inferior al de la plena. Es así como entre las pensiones restringidas se incluyen las pensiones causadas por despido sin justa causa, también denominada pensión sanción, y la pensión por retiro voluntario con 15 años de servicios.

Las normas que consagran este derecho están previstas en los artículos 8° de la Ley 171 de 1961 y 74, numeral 2, del Decreto 1848 de 1969, fundadas en el despido sin justa causa del trabajador. Así, el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, previó originalmente la pensión sanción para los trabajadores particulares y oficiales vinculados por contrato de trabajo que fueran despedidos sin justa causa, determinando que cuando la desvinculación se produjera después de 10 años de servicios y menos de 15 la pensión se pagaría a los 60 años de edad, y cuando ese hecho ocurría después de 15 años de servicios, se debería comenzar a pagar a los 50 años de edad; posteriormente el artículo 74, numeral 2, previó en términos semejantes la misma pensión pero solo para trabajadores oficiales, y en el numeral 3, reafirmó el derecho a la prestación después de 15 años de servicios cuando el retiro fue voluntario, y la edad de 60 años, para su reclamación.

Tesis reiterada en sentencia SL 2054 de 2019, en donde se recordó que la pensión restringida de jubilación se adquiere con la terminación del contrato sin justa causa y el tiempo de servicios (causación), mientras que la edad es un requisito de exigibilidad (disfrute).

Finalmente, sea de paso indicar que, en esta providencia, la H. Corte Suprema indicó que aun cuando para el demandante la pensión se hizo exigible para en el año 2018, al haberse causado desde 1991 (fecha de terminación del contrato y contar 11 años de servicios) tenía derecho a la mesada 14.

En ese orden de ideas, se tiene que, para que la demandante tenga derecho a la prestación que reclama, debe acreditar:

10 años laborados para la entidad

Haber sido despedida sin justa causa

Tener más de 60 años para el disfrute.

Despejado el tiempo laborado para la entidad, pasa esta Sala a indicar, que el requisito de despido sin justa causa se encuentra acreditado en la pág. 4 del anexo 8, en donde se señala que la terminación del contrato obedeció a la supresión de cargo.

Al respecto ha de indicarse que de vieja data la H. Corte Suprema de Justicia ha indicado en pacífica postura que las finalizaciones de contrato por autorización de la ley no son per se justas causas, así indicó en sentencia SL 41492 de 2010, en donde rememoró la sentencia 8247 de 1996, en donde se indicó:

“Frente a lo anterior, se tiene que no obstante que el a-quem admitió que el contrato de trabajo que unió a las partes finalizó “por una causal legal” y que “no es justa causa”, concluyó que, dadas las condiciones sui géneris creadas por la señalada disposición transitoria de la Constitución y las normas que la desarrollan, no debían aplicarse en este caso los preceptos legales y convencionales reguladores de la desvinculación sin justa causa.

(...)

Como en los casos anteriores, debe la Sala advertir, según lo que viene de expresarse, que cuando se hace referencia al despido sin causa justa, no se excluye al que opera por decisión unilateral del empleador con autorización legal, distinto al previsto por una de las justas causas de despido, porque no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo con el despido precedido de justa causa. De tal suerte que aun cuando, para el sector oficial, el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945 establece los modos de finalización del vínculo laboral, y para el sub-exámine los Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993 permitieron la supresión del cargo y consiguiente desvinculación, únicamente constituyen justa causa, como ya se expresó, las consagradas en los artículos 16, 48 y 49 del mismo decreto 2127, aludidas también en el literal

g) del citado artículo 47. (...)

Advierte también la Corte, que sería inaceptable que para la reorganización de una empresa oficial, en hipótesis semejante a la de autos, como es la prevista por el literal

f), del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, el Estado, a quien corresponde dar especial protección al trabajo por mandato de los artículos 25, 53 y 54 de la Carta Política, actuando como tal y al mismo tiempo como empleador, pudiera arrogarse la facultad de disponer, no ya de manera general sino para el caso específico y en su propio provecho, que la terminación de los contratos de determinados trabajadores, provocada por su iniciativa y producida por su voluntad, quedase excluida de las reglas generales sobre indemnización de perjuicios y de pagar la pensión sanción al trabajador desvinculado con más de diez años de servicio, consagrada en el artículo 80. de la ley 171 de 1961 y en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, la que sólo se pierde cuando el despido se funda en justa causa y no cuando la terminación unilateral tiene su basamento en esta causa legal”.

Se tiene entonces acreditado que la terminación del vínculo contractual de la demandante con la empleadora, si bien obedeció a causas legales, no fueron justas y con eso se tiene satisfecho el segundo requisito que exige la norma.

Ahora habiendo, nacido CARLOS ALBERTO MONTOYA SIERRA el 10 de enero de 1958 cumplió los 60 años el mismo día y mes del 2018, fecha a partir de la cual se hizo exigible la prestación que se ordena.

En ese sentido, y comoquiera que la prestación se causó con anterioridad a la expedición del AL 01 de 2005, esto es, el 29 de diciembre de 1991 y acreditó los requisitos para su disfrute el 30 de julio de 2003, es claro que tiene derecho que su mesada pensional sea reconocida con 14 mesadas anuales.

Previo a realizar el cálculo, considera esta corporación oportuno destacar que los argumentos esgrimidos por la demandada para desconocer el derecho a la pensión restringida del trabajador, en cuanto a la incompatibilidad que presenta con la prestación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reconocida por el ISS, toda vez que de vieja data la H. Corte Suprema ha resuelto dicho conflicto indicando que las prestaciones tienen un origen diferente, así la prestación reconocida por el ISS buscaba asegurar el siniestro de la invalidez, y la pensión restringida o sanción corresponde reconocerla en calidad de empleador en razón del tiempo que

el trabajador laboró para esta y a que se le terminó la relación laboral sin una justa causa.

Teniendo en cuenta que la prestación se reconoció en cuantía del salario mínimo y no se discutió su valor, esta Sala sólo actualiza el retroactivo.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2018	3,18%	13 y 21 días	\$ 781.242	\$ 10.707.215
2019	3,80%	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	1,61%	14	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	5,62%	14	\$ 908.526	\$ 12.719.364
2022		10	\$ 1.000.000	\$ 10.000.000
			TOTAL	\$ 57.309.445

El FONDO DE PASIVOS SOCIALES DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA deberá seguir reconociendo a partir del 1 de octubre de 2022 una mesada pensional en la suma de 1 SMMV que para la presente anualidad asciende a \$1.000.000, sin perjuicio de los incrementos anuales que se decrete el gobierno, y con 14 mesadas, conforme lo ya explicado, autorizándose que del retroactivo calculado se realicen los descuentos en salud.

En lo demás se confirma la sentencia de primera instancia, comoquiera que no fue apelada la decisión por la parte demandante.

PRESCRIPCIÓN.

No se causó este fenómeno extintivo, como quiera que el demandante reunió los requisitos para el disfrute desde el 10 de enero de 2018 y presentó demanda en el año 2019 sin que se hubiese configurado el fenómeno extintivo trienal.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de

Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, CONFIRMA, la sentencia de primera instancia, actualizando la liquidación del retroactivo pensional.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ





TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA  
LABORAL

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado:	05001 31 05-022-2019-00067-01
Demandante:	CARLOS ALBERTO MONTOYA SIERRA
Demandado:	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
Decisión:	CONFIRMA
Magistrado ponente	DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado hoy 29 de noviembre de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS  
SECRETARIO